

# América Latina en la nueva agenda internacional

Manuel Marín

---

**El interés por lo que ocurre en Latinoamérica es hoy mucho menor en EE UU y en la UE, por razones económicas, pero sobre todo porque no está en la nueva agenda de la seguridad internacional. Esto explica, en parte, la política del FMI hacia la región.**

---

**Y** ..., después de todo lo que ha pasado dónde estamos nosotros? Ésta es una de las preguntas recurrentes que suelen hacer los latinoamericanos cuando tratan de adivinar su futura ubicación en lo que se supone es el nuevo orden internacional que se está diseñando después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. No resulta fácil responder, sobre todo cuando se presume que tanto para estadounidenses como para europeos, América Latina ha dejado de ocupar un puesto relevante en la agenda internacional, al menos en los momentos en que escribo este artículo.

La situación en América Latina en el nuevo sistema de relaciones internacionales surgido tras 11-S, está relacionada con la crisis del llamado diálogo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Esta crisis afecta a América Latina, donde en los años noventa, la UE y EE UU establecieron una gran competencia con el fin de consolidar unas relaciones privilegiadas con un continente que en aquellos años mereció el calificativo, hoy en desuso, de "zona emergente". Es decir, un conjunto de países con el suficiente atractivo económico y comercial como para provocar una reñida competencia entre los dos bloques comerciales más importantes del mundo.

Aunque no parece que se esté alumbrando un auténtico nuevo orden internacional –en ocasiones parece más bien que estamos volviendo al viejo orden que permitió que el imperio más fuerte y poderoso del momento estableciera las reglas del juego– hay que señalar que la nueva agenda internacional ha hecho de la seguridad, individual y colectiva, la referencia máxima a la hora de catalogar las prioridades y los intereses de EE UU, pero también de la UE.

---

Manuel Marín es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, ex vicepresidente de la Comisión Europea.

En el caso europeo, las razones se amplían. Hay que tener en cuenta el peso que ha tenido la demanda de "más seguridad" en los últimos procesos electorales, en los que se ha confirmado una tendencia preocupante hacia las formaciones políticas de corte facista y xenófobo. En el caso de EE UU, es la asunción de la seguridad nacional y la defensa del territorio como la prioridad y el interés estratégico número uno lo que determina no sólo la agenda política interna sino lo que se viene a llamar el nuevo orden internacional surgido tras el 11-S.

Así las cosas, y si se tiene en cuenta que la seguridad es la referencia central del actual discurso internacional tanto de EE UU como de la UE, resulta sorprendente que estemos ante una degradación nunca antes conocida del diálogo euroatlántico. Los europeos critican el unilateralismo de EE UU; los estadounidenses manifiestan un escepticismo, cuando no una clara desconfianza, hacia la capacidad de los europeos para acompañarles en la definición y sobre todo en la ejecución de las nuevas políticas destinadas a combatir el terrorismo internacional.

Está claro que la actual administración republicana de George W. Bush no pretende que los intereses supremos de EE UU sean debatidos ni administrados por instancias multilaterales, ni siquiera por aquéllas formadas por países amigos y aliados. La guerra de Afganistán contra Al Qaeda ha puesto de manifiesto que no era una guerra para compartirla con los aliados, a excepción del Reino Unido, a pesar de que la OTAN activara por primera vez en su historia el artículo V del tratado de Washington que garantiza la asistencia y defensa mutua en el caso de una agresión exterior. Los estadounidenses apreciaron el gesto como un mensaje de solidaridad, pero el Pentágono consideró que definir y organizar esta guerra en el seno de la OTAN les supondría más un engorro que una facilidad. En su opinión, los europeos tienen una fuerte predisposición a la cacofonía y a crear problemas políticos innecesarios, algo que, por otro lado, no deja de ser en parte cierto.

Los recientes conflictos comerciales han añadido más leña al fuego ya existente y complicado de apagar. Que EE UU y la UE se peleen en el ámbito comercial con mayor o menor acritud está en la naturaleza de las cosas y en la ambición de los dos principales mercados del mundo. Tal vez la fuente de irritación europea provenga del hecho de que una administración republicana nos hizo creer que el libre comercio era un objetivo sano e irrenunciable y que se colocaba como una de las prioridades de la agenda internacional del presidente Bush. Sin embargo, el 11-S también parece haber servido para que EE UU recupere altas dosis de proteccionismo comercial que se justifican más por necesidades de política interna y presiones de grupos sectoriales que por razones de seguridad nacional.

Otro aspecto preocupante es el carácter instrumental de la llamada coalición internacional contra el terrorismo. La mayoría de sus componentes han comprendido que la coalición se administra en función de la prioridad y

el interés estratégico prioritario de EE UU: la seguridad nacional. Así, se han mantenido negociaciones y acuerdos, en los que cuando los interlocutores han sabido insertarse en esta nueva realidad han obtenido resultados más que honorables. Un claro ejemplo es la Rusia de Vladimir Putin y el amplio paquete concebido en torno al tratado ABM y el escudo antimisiles. El presidente Putin es casi seguro el líder que mejores réditos ha sacado de la nueva situación. Es cierto que ha tenido que aceptar la visión estadounidense sobre el escudo antimisiles y la reducción de misiles intercontinentales, pero a cambio ha obtenido una asociación con la OTAN, la calificación de la economía rusa como economía de mercado, antesala de la incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que Chechenia deje de ser una guerra de exterminio para convertirse en un guerra justificada contra el terrorismo internacional.

El acuerdo no es malo, y salvando las distancias, marca la línea a seguir por otros interlocutores de la coalición: cuanto más se comprenda y se participe de la opción seguridad más réditos se pueden obtener respecto a la situación particular de cada uno, siempre y cuando la seguridad nacional de EE UU salga fortalecida en la negociación.

Si la nueva agenda internacional parece pues diseñarse sobre el eje fundamental de la seguridad, y en un contexto de crisis del diálogo euroatlántico, ¿dónde está América Latina en esta agenda?

### América Latina en los años noventa

En la década pasada, la región fue el escenario de una fuerte competencia entre europeos y estadounidenses para establecer un sistema de relaciones privilegiadas política y económicamente.

Dos modelos fueron ofrecidos al continente suramericano: por el lado estadounidense, la integración hemisférica del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), una gran zona de libre comercio desde Alaska a Tierra de Fuego. Este modelo pretende extender el éxito del tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre México, EE UU y Canadá, al resto del continente. Del lado europeo, se hizo una oferta selectiva de libre comercio y cooperación al desarrollo basada en un regionalismo abierto acompañado de un fuerte diálogo político. Se trataba de hacer de la integración regional un modelo útil para las distintas regiones de América Latina, cuya referencia era el éxito de la integración europea.

La competencia entre estos dos modelos se debía —como ocurrió en algunas regiones asiáticas—, al interés por instalarse convenientemente en aquellas zonas del mundo que se suponían estaban en condiciones de salir del subdesarrollo y ofrecían economías con un potencial elevado de crecimiento económico en el corto plazo. Eran, como ya se ha dicho antes, las llamadas zonas emergentes.

América Latina había hecho los deberes para ganarse la confianza internacional. La democracia, las libertades, los derechos humanos volvían con fuerza. La normalización democrática del continente paradigma de los golpes de Estado y de las duras dictaduras de los años setenta era un hecho irreversible y prometedor. Al mismo tiempo, se produjo un retorno generalizado a la ortodoxia económica. La hiperinflación se controla, los déficit se ajustan y se produce un movimiento generalizado hacia la liberalización de la economía. Las privatizaciones y los acuerdos comerciales dirigidos al libre comercio marcan una tendencia general para el continente. El modelo económico basado en lo que luego se convertiría en el consenso de Washington se adoptó como la línea maestra del futuro político y económico de América Latina.

**En los noventa,  
las instituciones  
públicas y el  
Estado eran  
fuente de  
ineficacia política**

Una vez demostrado el atractivo de la región, empezó la dura competencia entre europeos y estadounidenses. Sin embargo, pronto surgieron, junto a notables éxitos, algunos lados oscuros y preocupantes del camino elegido.

El crecimiento económico de América Latina, el notable aumento del comercio y sobre todo de las inversiones extranjeras daban unas expectativas muy favorables para el futuro. Todo parecía encarrilado. La firma del TLC, y su notable éxito, aceleraba la respuesta europea que ofrecía un trato similar al propio México, Chile y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Las privatizaciones ofrecían enormes posibilidades a las inversiones extranjeras y se constituían en el termómetro que medía las disputas entre bancos y empresas europeas y estadounidenses por hacerse con aquellos sectores estratégicos de mayor crecimiento económico. Hasta que se produjo la crisis de México y el efecto *tequila* hizo aflorar los lados oscuros y preocupantes del camino.

Para el discurso de aquellos años, el Estado y las instituciones públicas eran fuente de ineficacia política y un lastre para el desarrollo económico. El diagnóstico era cierto y se suponía que el remedio pasaba por reducir al máximo el sector público y el papel de los Estados, poco eficientes y, en la mayoría de los casos, corruptos. La solución milagrosa fue apostar por una política de privatizaciones, con la que se abría la posibilidad de sanear el déficit fiscal e invertir en las infraestructuras de base para conseguir una economía más competitiva e integrada en las oportunidades que ya ofrecía el fenómeno de la globalización.

Sin embargo, el mercado y el libre comercio no fueron capaces por sí solos de garantizar la transparencia. Al cobijo de la liberalización económica comenzó, salvo notables excepciones, un período de deterioro sistemático

de la moral pública que aumentó notablemente el grado de corrupción de los sistemas políticos de gobierno, en gran parte de los países latinoamericanos. Esta situación produjo una gran debilidad institucional y la pérdida de credibilidad de la clase política.

El fenómeno de autodestrucción de los partidos políticos tradicionales en algunos países y la vuelta del populismo de antaño explican el error de no haber combinado el éxito en el cambio económico con la necesaria defensa de un Estado responsable y transparente hacia sus ciudadanos. La mayoría de las crisis de los últimos años son consecuencia de esta degradación profunda de las instituciones públicas que han supuesto, en casos extremos, la práctica desarticulación del Estado como referente nacional e internacional.

En esta época, además, América Latina en su conjunto empieza a generar una nueva interdependencia internacional que se acelera con la globalización. La producción y el comercio de los productos de base y las materias primas, las *comodities*, no son suficientes para financiar el modelo económico. Es necesario incorporar capital extranjero a través del crédito internacional, inversiones en portafolio, o inversiones directas. América Latina pasa entonces a depender de los flujos financieros internacionales en un mundo cada vez más globalizado. Así aparece lo que probablemente constituye el mayor problema económico del continente: la ausencia de ahorro interno capaz de soportar con mayores garantías las crisis financieras internacionales. Ausencia que pone al descubierto, entre otras cosas, que pagar impuestos es también un elemento central del Estado transparente y responsable.

### Las relaciones UE-EE UU-América Latina

¿Cómo se han desarrollado a lo largo de estos años, las relaciones de América Latina con la UE y con EE UU? Recordemos que la calificación de Latinoamérica como zona emergente y las posibilidades de negocio abrieron una dura competencia entre europeos y estadounidenses sobre la base de dos modelos de relaciones diferentes.

Del lado de EE UU se firmó el TLC con Canadá y México y se llevó a cabo una oferta general de libre comercio, el ALCA, que no pudo concretarse debido a la negativa del Congreso estadounidense a conceder al entonces presidente, Bill Clinton, la autorización para negociar. A pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca, no obtuvo el *fast track*, lo que imposibilitó que se pudieran concluir las negociaciones con Chile, que era el siguiente país llamado a incorporarse al TLC.

Siguiendo los pasos de la moda diplomática de los años noventa, se pusieron en marcha las cumbres hemisféricas de jefes de Estado y de gobier-

no. Y Bush parece interesarse más por el continente, aunque por el momento sólo se ha producido una vaga oferta para incorporarse al TLC limitada a los países centroamericanos. En relación a la seguridad y la lucha contra el terrorismo se ha llegado a un acuerdo internacional a través de la Organización de Estados Americanos.

Del lado europeo, se han conseguido logros importantes con México, y recientemente con Chile, los dos únicos países con los que ha sido posible firmar acuerdos de libre comercio de gran envergadura. La apuesta de Mercosur vive días difíciles debido a las dificultades internas de esta integración regional, agravadas por la crisis argentina. Es cierto que del lado europeo estas dificultades han sido aprovechadas por algunos Estados miembros temerosos del potencial agrícola y ganadero de Mercosur para diferir las negociaciones finales vinculándolas con el resultado final de las negociaciones de la OMC. Respecto a la Comunidad Andina y América central se ha renovado el sistema de preferencias generalizadas.

Los europeos también se han sumado a la diplomacia de las cumbres y han puesto en marcha una cumbre anual a nivel de jefes de Estado y de gobierno.

La seguridad y la lucha contra el terrorismo han sido también parte importante de la II Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Madrid (mayo de 2002). Hay que señalar que la parte latinoamericana, a través del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, advirtió que junto a la seguridad, debía mantenerse lo que calificó como la agenda de la esperanza, es decir, que la seguridad no puede ser el todo o nada de la nueva agenda internacional. Hay otras cuestiones que no deben abandonarse o subordinarse a la nueva seguridad internacional.

Sobre una cuestión tan sensible como el narcotráfico que afecta de una manera dramática a algunos países latinoamericanos, la UE ha practicado una política completamente opuesta a la de EE UU. Éste aplicó su conocida política de certificación, es decir, el establecimiento de sanciones políticas o económicas a aquellos países que en su opinión no cooperan lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico; los europeos impulsaron el principio de la responsabilidad compartida, es decir, si existe una responsabilidad clara e innegable de los países productores, ésta debe compartirse con los países consumidores que no sólo ofrecen el mercado sino la mayoría de los instrumentos financieros para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Al final, logró imponerse el punto de vista europeo plenamente compartido por el grupo latinoamericano. Las Naciones Unidas, en su conferencia sobre drogas y narcotráfico, ha consolidado el principio de

*La principal asignatura pendiente es la reforma fiscal y una gestión transparente de la 'res publica'*

la corresponsabilidad Norte-Sur sobre esta cuestión. EE UU terminó por levantar la certificación que pesaba sobre Colombia y en los últimos años parece haber aceptado este punto de vista, y no ha procedido a certificar a ningún país latinoamericano.

### ‘¿Dónde estamos nosotros, los latinoamericanos?’

El interés actual por lo que ocurre en Latinoamérica es mucho menor tanto en EE UU como en la UE, salvando el interés particular que puedan tener algunos Estados como España. Las razones son varias y en cierta medida analizarlas representa un incomodidad debido al riesgo que supone pretender pergeñar el futuro en el mundo en que vivimos. Pero lo intentaremos.

En primer lugar hay que hablar de los motivos de carácter económico y financiero. Los económicos tienen que ver con el modelo que se ha seguido en la mayoría de los países latinoamericanos y cómo se ha conducido y gestionado políticamente. Es cierto que el modelo definido en el consenso de Washington ha sido una referencia general, pero no todos lo han aplicado y gestionado de la misma forma. Los resultados son, por lo tanto, diferentes. Las razones de tipo financiero se deben al cambio que se ha producido en la gestión de las crisis con la nueva filosofía introducida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), filosofía que responde en parte a la visión que la Reserva Federal.

El modelo económico latinoamericano es vulnerable y dependiente de las crisis internacionales. La debilidad es la ausencia de ahorro interno que obliga a un desarrollo económico basado en la incorporación de capitales internacionales. Las principales asignaturas pendientes de muchos gobiernos latinoamericanos son las reformas fiscales, además de una gestión rigurosa y transparente de la *res publica*. Este modelo sólo puede funcionar si hay crédito internacional, inversiones en portafolio y una elevada inversión directa. La aparición de una crisis, aunque lejana como fueron la asiática o la rusa de 1998, o una situación de cambio de ciclo económico que apunte a la recesión en el mercado estadounidense o europeo acaba por impactar de forma negativa en el modelo latinoamericano.

Y esto es lo que ocurre actualmente. El crédito internacional se ha restringido por los niveles de riesgo hasta el punto de estar en niveles negativos; las privatizaciones han reducido el interés por invertir en operaciones de portafolio en las bolsas latinoamericanas que, salvo unos pocos casos, se han quedado pequeñas; y, por último, el cambio en el ciclo económico junto a la pérdida de confianza han reducido dramáticamente las inversiones extranjeras. Muchos gobiernos latinoamericanos viven pendientes de las agencias de calificación de riesgos y de los rumores de los mercados financieros. Sólo una progresiva política fiscal podrá dotar al modelo de una plataforma

que combine más transparencia y justicia en el reparto de la carga fiscal y otorgue al modelo una red de seguridad en términos de ahorro interno que haga más llevadero y amplíe el margen de maniobra de los gobiernos frente al impacto de las crisis internacionales. Argentina podría, probablemente, resolver su falta de liquidez con la mitad de los capitales argentinos que se han colocado en las plazas financieras internacionales. Probablemente, el presidente peruano Alejandro Toledo podría pagar la educación nacional con lo que colocaron fraudulentamente en el extranjero el tándem Fujimori-Montesinos. Se trata de dos ejemplos extremos, lo reconozco, pero habría muchos intermedios.

### Las nuevas políticas del FMI

La nueva aproximación del FMI respecto al método para tratar las crisis financieras está incidiendo de una manera determinante en el conjunto latinoamericano. En este sentido, la situación argentina se configura como un experimento y al mismo tiempo un aviso para navegantes. A partir del caso argentino, el FMI pretende marcar una línea divisoria respecto a tiempos anteriores y lanzar el mensaje de que para el futuro las reglas del juego han cambiado.

Esta nueva filosofía parece asentarse en tres principios básicos:

– El rescate financiero en tiempos de crisis será siempre una decisión individual y no general o colectiva. Ya no habrá una visión general de América Latina o de Asia. Se impone una valoración individualizada y específica de cada país que será rescatado –ayudado financieramente– en función de los méritos que haga para dotarse de una política económica estable y rigurosa.

– Las presiones políticas para arrancar una decisión política de rescate cuando no se han hecho los deberes es contraproducente. Ayudar financieramente a un gobierno que no asume el rigor económico es negativo ya que desincentiva una vuelta al camino de la ortodoxia económica y facilita la búsqueda de soluciones políticas para salir del paso.

– El rescate financiero será, por lo tanto, un premio sólo para aquel que haya hecho los deberes y significará además un reconocimiento a su comportamiento como gestor sólido y riguroso, lo que le conducirá a la recuperación de la confianza internacional.

Así presentado nadie sensato podrá negar que esta nueva filosofía responde al sentido común y contiene en sí misma grandes dosis de moral pública. Es lógico, se puede argüir, que se aplique de plano al caso argentino, sin duda necesitado de sentido común y de moral pública. Todo parece cuadrar y además es una filosofía ampliamente compartida tanto por EE UU como por la UE.

Es difícil predecir cuales serán las consecuencias de este nuevo método de gestión de crisis financieras que aleja las consideraciones políticas para fun-

damentarse únicamente en consideraciones de carácter económico y financiero. Por otro lado, es legítimo preguntarse si el FMI y sus grandes financieros –los estadounidenses en primer lugar y luego los europeos–, están aplicando en cada caso individual la misma filosofía y el mismo método cuando se presenta el interés número uno de la nueva agenda internacional: la seguridad.

El presidente Cardoso tuvo el valor de plantearlo cuando contrapuso la negativa a aprobar el rescate financiero de Argentina y la relativa facilidad con que se aprobó la ayuda financiera a Turquía, país que también se encontraba en bancarrota. Nadie puede negar que después del 11-S y de la guerra contra Al Qaeda en Afganistán, la situación geoestratégica de Turquía y la potencia militar de su ejército hacen del país el pivote central en materia de seguridad en la zona. Tampoco han desaparecido los argumentos sobre el desorden económico en Pakistán, lo que no impidió que se levantaran las sanciones que pesaban sobre este país. No fue un premio a un ajuste económico riguroso; se trató más bien de un premio de naturaleza política por haber ayudado a aislar a los talibanes y propiciar su derrota. En Rusia, Putin no ha conseguido que la Duma apruebe la ley que liberaliza la propiedad agrícola y ningún extranjero puede comprar suelo ruso, lo que no ha impedido que europeos y estadounidenses admitan a la economía rusa como economía de mercado en términos de la OCDE dentro del suculento paquete concebido en torno al tratado ABM.

Éstos son sólo algunos ejemplos de los muchos que demuestran que la nueva filosofía y el nuevo método del FMI –probablemente sugerido por EE UU– tiene una variante interesante e interesada: cuando se presenta la seguridad como oferta de negociación se puede obtener un rescate económico y financiero concebido en términos flexibles y rápidamente decidido. Por el contrario, si en la oferta, la seguridad no existe o es un capítulo menor, el ejercicio a realizar se ajustará a los criterios antes señalados.

¿Acaso los latinoamericanos están también en la nueva agenda de la seguridad internacional? Me temo que no y esto explica en cierta medida la preocupación de gobiernos y opinión pública en Latinoamérica. Voy más lejos: en las primeras reacciones al 11-S, algunos analistas reaccionaron ingenuamente al considerar que América Latina obtenía un plus de confianza internacional debido a la inexistencia en el continente de ningún grupo u organización terrorista con intenciones de atacar el territorio estadounidense. Este plus de confianza se gana cuando uno es capaz de insertarse en el nuevo concepto de seguridad y de cooperar para fortalecer los intereses en esta materia, en primer lugar, de EE UU y a continuación de los europeos. Algunos Estados miembros están planteando posiciones bastantes radicales en lo que constituye unos de los problemas de seguridad mayor en el Viejo Continente: la emigración y su uso electoral en los últimos tiempos.

Ésta sería la primera respuesta a la pregunta *¿y...después de lo que ha pasado, dónde estamos nosotros...?* En estos momentos, América Latina no

está en la nueva agenda internacional de la seguridad. Para lo bueno y para lo malo. Es una simple constatación de una realidad. Incluso en el caso de Colombia, dudo que se produzca la intervención de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas como pretendía inicialmente el nuevo presidente Álvaro Uribe. No habrá cascos azules en el conflicto colombiano, tal vez un nuevo espacio de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia auspiciado por las Naciones Unidas.

Menos probable parece aún el aparente éxito del FMI –apoyado por estadounidenses y europeos y, en particular por el gobierno español, puesto que España es el principal inversor en Argentina–, en conseguir hacer de la crisis argentina un modelo para evitar el contagio al resto del continente. El “no hay contagio” está por ver. Hace poco, Uruguay, un país con una de las democracias de mayor calidad en América Latina, se ha visto obligado a aplicar un severo ajuste fiscal para poder obtener financiación del Fondo. Negar que lo que ocurre en Uruguay no es un reflejo de lo que pasa en Argentina es simplemente absurdo. La respuesta no es convincente cuando alegan que la situación no es grave porque se trata de un país pequeño. ¿Acaso se actuaría de otra manera si se presenta una crisis en algún país grande como Brasil?

La nueva filosofía y el nuevo método de gestión de crisis del FMI tiene que pasar todavía la prueba del algodón cuando se presente un episodio claro que apunte a crisis en la economía brasileña. La suma del contagio Argentina-Brasil repercutiría en todo el continente y particularmente en México y, a partir de allí, se convertiría en un serio problema para el resto de las economías desarrolladas. Si esto ocurre, no parece que se vaya a intentar resolver el problema con un tratamiento individualizado y específico país por país y que no se admita la consideración política elemental de que si el binomio crítico Argentina-Brasil se produjera, el susto y las repercusiones financieras en España serían tremendas. Es sólo un ejemplo. El Tesoro estadounidense no permitiría tampoco una degradación de la situación financiera en México y habría apoyo financiero, aunque el presidente Vicente Fox no haya ni siquiera iniciado la prometida y necesaria reforma fiscal. Es sólo otro ejemplo. En resumen; no está claro que estemos ante a una nueva filosofía y un nuevo método. Tal vez estemos frente a los intereses de siempre, pero presentados de otra manera.

Escribir un artículo de fondo en la actual situación comporta grandes riesgos, el futuro trabaja sobre lo imprevisible que parece ser una constante permanente en la época en que vivimos. Si finalmente se presentaran tiempos difíciles, sería un error abandonar la recreación del Estado sobre bases de transparencia y justicia. Es la única vía aunque sea difícil. Volver al populismo sería dramático.